

100 DÍAS DE BIDEN

Los primeros 100 días del nuevo gobierno de Estados Unidos. Significado para Honduras

Dario A. Euraque
Abril 2021

La elección de Joe Biden a la presidencia de los EEUU generó amplias expectativas de cambios profundos en sus relaciones bilaterales con Honduras. En Honduras han cultivado esas expectativas no solo distintos segmentos de la población y la oposición al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, sino también actores importantes del partido Demócrata y sus simpatizantes fuera y dentro de ambas instancias del Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes y el Senado. Personeros y portavoces del gobierno en Honduras igual han registrado un grave interés en los posibles nuevos rumbos de una administración Biden, y en particular los actores más progresistas del Partido Demócrata perfilados como severos críticos de la política exterior de Trump para con Honduras entre 2017 y 2021. El trasfondo de este complejo escenario involucra graves acusaciones criminales de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York a actores de los carteles del narco tráfico internacional con origen en Honduras, más sus nexos con autoridades oficiales, políticos, fuerzas armadas y empresarios hondureños. Si bien los detalles correspondientes han surgido a la luz pública durante los últimos cinco años, sus hechos se remontan a los primeros años del siglo actual. Entre Biden y sus allegados, este escenario cobra menos interés y urgencia actualmente, que la dramática situación de la migración en la frontera con México, cuyo trágico dinamismo en los últimos años se articula con la trágica situación en Honduras.

INTRODUCCIÓN

La elección de Joe Biden a la presidencia de los EEUU generó amplias expectativas de cambios profundos en las relaciones bilaterales con Honduras. Pocos países en América Latina arrastran un historial tan lleno de intervenciones militares, diplomáticas e empresariales con origen en los EEUU que Honduras. No es por nada que Honduras sirvió, desde 1904, para que un escritor norteamericano se inventara el moquete de "República Bananera". Esa percepción del país como un Estado fallido donde sus políticos y elites, con escasas excepciones, mal gobiernan la nación sin dignidad y carentes de compromiso efectivo con las necesidades básicas de las mayorías empobrecidas, persiste hoy en día entre los principales actores estratégicos en los EE.UU. y entre aquellos que diseñan e implementan las políticas exteriores de ese poderoso país.

Se cultiva esa percepción en general sin tomar en cuenta como el accionar histórico de los propios presidentes de EE.UU. y sus políticas exteriores, en lo político, en lo económico, y más recientemente en el campo de la lucha contra la corrupción y sus nexos con los carteles de narco-traficantes, aun cuando se ha invertido millones de dólares, ha contribuido a la deplorable situación social del país- a tal grado que la única opción viable de supervivencia para miles de hondureños hoy en día, como nunca en la historia del país, es arriesgar sus vidas, las de sus niños y niñas encaminándose, solos o en caravanas, para buscar trabajo, seguridad y esperanza en el futuro en los EE.UU. La exportación desde Honduras que hoy en día se conoce internacionalmente ya no es el banano, sino su gente, ello a la vez articulado con la exportación de drogas ilícitas provenientes desde Sudamérica.

Biden apela hoy en día al papel que el mismo desempeñó como vicepresidente de la administración de Barack Obama (2008-2016), cuando este lo designó como el principal portavoz y ejecutor de sus políticas en cuanto los mismos graves problemas que Obama y Hilary Clinton enfrentaron después del Golpe de Estado del 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE BIDEN QUE SE VISLUMBRA

Estos problemas se profundizaron en el 2012, a tal grado que Biden mismo, en su condición de vicepresidente, a fines del 2015 publicó un editorial que fijó la estrategia de esa coyuntura.¹ Parece ser que esa misma estrategia se retoma a comienzos del 2021. Según el Plan Biden del 2015, "las economías de El Salvador, Guatemala y Honduras siguen atascadas mientras las del resto de América avanzan. Una educación deficiente, la corrupción institucional, la delincuencia descontrolada y la falta de inversión hacen que estos países estén estancados." Continuaba el documento, "...la seguridad hace que todo lo

1 Joe Biden, "Plan for Central America," *New York Times*, January 29, 2015.



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

demás sea posible. Podemos ayudar a estabilizar los vecindarios por medio de la policía comunitaria y erradicar las redes de delincuencia transnacionales que han hecho que Centroamérica se convierta en un semillero para el tráfico de drogas, la trata de personas y los delitos financieros.”

Durante su campaña Biden y sus seguidores condenaron el abandono de esta estrategia durante la administración de Trump. Por un lado, se comprometieron con más asistencia económica para Honduras en el marco de mas asistencia para el Triángulo Norte, y simultáneamente se comprometió con eliminar las políticas migratorias más radicales de Trump contra los indocumentados, el acceso al asilo según la legislación norteamericana, y al respeto de normas internacionales de derechos humanos de los migrantes.

Específicamente, desde el 11 de noviembre del 2020 Biden anunció que abordaría “las causas fundamentales de la migración al fomentar una mayor seguridad, desarrollo económico y respeto por el estado de derecho en América Central. El Triángulo Norte está dividido por la violencia, plagado de narcotráfico y preso del miedo a las organizaciones criminales que manejan armas de uso militar, y es particularmente peligroso para las mujeres y los niños.” Proyectó también “un paquete de asistencia de cuatro años y \$4 mil millones para la región, con ayuda vinculada a los gobiernos de la región que ofrezca reducciones cuantificables de la violencia de pandillas y de género, mejoras en los sistemas legales y educativos, y la implementación de medidas anticorrupción, entre otras cosas. Este apoyo también se complementará con donantes internacionales y socios regionales.”²

Por lo tanto, a diferencia de la administración de Donald J. Trump (2016-2020), Biden, con cierta vocación de sensibilidad hacia los problemas en Centroamérica, y por sus experiencias en el Senado norteamericano y como vicepresidente bajo Barack Obama, presenta una cara de “los EE.UU” muy distinta a la proyectada por Trump y sus burócratas asignados con las tareas de dirigir las principales agencias del Estado norteamericano ante Centroamérica y claro, Honduras: el Departamento de Estado, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Es en este el marco estratégico que en Honduras ha recibido más atención un nombramiento de Biden: Ricardo Zúñiga, diplomático de carrera del Departamento de Estado. Ha sido designado “enviado especial” ante los gobiernos del llamado Triángulo Norte- Guatemala, El Salvador y Honduras. En Honduras Zúñiga ha cobrado comentarios y especulaciones no tanto por el hecho especulaciones no tanto por sus experiencias profesionales en Brasil y Cuba, sino porque nació en Honduras a comienzos de la década de 1970, cultiva relaciones familiares en el país, y, trágicamente, su padre victimizado por la violencia hondureña en otra época; de hecho, fue asesinado brutalmente en septiembre de 1985. En ese sentido, en la his-

toria de las relaciones diplomáticas entre EE. UU y bilaterales el accionar y posible incidencia de Zúñiga recibirá más atención que semejantes “enviados especiales” en coyunturas de crisis anteriores.

LOS JUICIOS EN NUEVA YORK

El trasfondo más crítico que deben atender todos los actores anteriores y sus aliados internacionales, oficiales y privados, involucra el cúmulo de graves acusaciones criminales de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York a actores de los carteles del narco-tráfico internacional con origen en Honduras, más sus nexos con autoridades oficiales, políticos, fuerzas armadas y empresarios hondureños que si bien ha surgido a la luz pública durante los últimos cinco años se remontan a los primeros años del siglo actual. Desde de fines de 2011, la diplomacia de Obama presionó por reformas a la Constitución de Honduras para permitir la extradición de hondureños a los EE. UU por acusaciones de tráfico ilícito de drogas al país del norte, ello por la evidente impunidad de que gozaban los narcos en Honduras, de hecho, en contubernio con los más altos mandos de la policía y las fuerzas armadas, varios estos últimos capacitados en centros y academias militares norteamericanas. En el 2018 el hermano menor del presidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Hernández, fue apresado por agentes de la DEA en Miami y acusado de narco-trafficante. Su penoso juicio público se llevó a cabo en octubre del 2019 en Nueva York, y sirvió para salpicar a numerosos actores de clase política hondureña y numerosos empresarios y banqueros corruptos que sirvieron para lavar narco dinero y/o canalizar narco dinero a las campañas electorales a todos niveles en el 2013 y el 2017.

Las reformas por las que presionaron Obama y Biden en el 2011 se decretaron en Honduras en el 2012, siendo Hernández presidente del Congreso Nacional y Pepe Lobo presidente del país. Electo Hernández presidente de Honduras a fines del 2013, presidió las primeras extradiciones en 2014, parece ser, según sus declaraciones, sin conocer los vínculos de su hermano con los carteles de narcos hondureños y sus vínculos hasta con el Chapo Guzmán que la Agencia Anti-Drogas (DEA por sus siglas en inglés) conocía desde largo tiempo atrás y que muchos observadores independientes denunciaban también, victimizados estos últimos con la muerte en numerosas ocasiones. Entre el 2014 y hoy se han extraditado más de 20 hondureños en ese marco bilateral.

Casi igual número de narcos voluntariamente se han entregado a la DEA previendo que altos funcionarios del gobierno de Honduras y sus aliados en los más altos niveles de las fuerzas de seguridad se confabularan para eliminarlos como fuentes de información sobre un sistema de contubernio de malversación de fondos extranjeros y con la extorsión con estrechos vínculos a las maras del país que tanto han contribuido a destruir el frágil tejido social, que aun entre extrema pobreza impedía la implosión total de miles y miles de familias hondureñas. El presidente Hernández y sus defensores han negado la legitimidad de los juicios en Nueva York, pero se han acreditado el origen y proceso de extradición desde el 2012. Sus críticos enfatizan el hecho que ni los extraditados ni los que se

2 Biden-Harris, “El Plan Biden para Asegurar Nuestros Valores como una Nación de Inmigrantes,” 11 noviembre, 2020, página oficial web.

entregaron voluntariamente tenían acusaciones imputadas por la Fiscalía General de Honduras, cuya dirección sus críticos aseveran se apega a pautas emanadas desde la presidencia.

El 30 de marzo de este año, el presidente Hernández, conoció, igual que el mundo entero, la sentencia de cadena perpetua dictaminada por el Juez Kevin Castel del Distrito Sur de Nueva York contra su hermano Juan Antonio Hernández. Es más, el Juez Castel explícitamente no solo vinculó al presidente Hernández en las acciones criminales de su hermano sentenciado, sino que señaló que el tráfico de drogas desde Honduras había sido promovido por “el estado” hondureño desde hace una década. De esta manera Castel secundó a los fiscales que caracterizaron la colaboración de miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional con el narcotráfico desde hace más de una década. Castel también secundó las mismas acusaciones hechas por la oposición al Partido Nacional y por numerosas voces defensoras de los derechos humanos y analistas durante muchos años dentro y fuera de Honduras, incluso desde que Biden fuese vicepresidente. Hasta ahora ni Biden y sus portavoces ni sus diplomáticos han referenciado explícitamente estos hechos en la corte de Nueva York. Por ahora no se vislumbra un cambio en esta postura de Biden.

REACCIONES INICIALES EN HONDURAS Y EN EL CONGRESO DE LOS EE.UU.

Durante los últimos tres meses, en Honduras se han cultivado contrariadas expectativas no solo entre distintos segmentos de la población y la oposición al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, aunque desde el 20 de enero una reconocida empresa de relaciones públicas norteamericana distribuyó una carta de Hernández dirigida a Biden, acompañada de una foto con los mandatarios estrechando la mano durante ejercía la presidencia Biden. Según esa fuente, “La carta además agrega ‘reconocemos su compromiso con la Alianza para la Prosperidad y agradecemos su renovado apoyo a la región. Hernández además le manifestó ‘su Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con la gente de Centroamérica nos alienta enormemente’. La carta continúa con ‘Nos preparamos para discutir cualquier plan para estimular el crecimiento económico, reducir la desigualdad, promover oportunidades educativas, atacar redes delictivas y trabajar para fortalecer la gobernabilidad con instituciones transparentes y responsables, como se prioriza en su Plan’”.

Hernández se posicionaba así ante varios actores y escenarios en los EE.UU., en particular contra sus severos críticos dentro del Congreso norteamericano, en su mayoría actores importantes del partido Demócrata y los simpatizantes de este partido fuera y dentro de ambas instancias del Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes y el Senado. Las medidas más comprensivas fueron presentadas por los Senadores Patrick Leahy y Jeff Merkley ante el Congreso desde mediados de febrero. Todas estas iniciativas siguen sin ser vetadas por el Congreso en general. Tampoco ha sido respaldadas específicamente por Biden, sobre todo aquellas referencias que explícitamente enjuician al presidente de Honduras. La legislación de Leahy y Merkley, titulada la “Ley sobre los Derechos

Humanos y Anti-Corrupción del 2021”, afirmó Eugenio Sosa, reconocido y respetado comentarista hondureño, “prohibiría a Hernández ingresar a los Estados Unidos con la suspensión de la Visa América y también, suspendería la ayuda estadounidense a la Policía y las Fuerzas Armadas hondureñas.” Es más, resume Sosa, “el proyecto de ley, también establece que Hernández debe ser investigado bajo la llamada “Ley Kingpin” para determinar si merece recibir la designación oficial de narcotraficante.

Simultáneamente, las más reconocidas instituciones y personalidades políticas en Honduras, entre los partidos tradicionales- el Partido Nacional y el Partido Liberal- mas el partido LIBRE que coordina el expresidente Manuel Zelaya, y Salvador Nasralla del emergente Partido Salvador de Honduras- durante los primeros 100 días de la administración buscan posicionarse ante la nueva estrategia emergente en Washington, obviamente con diferentes intereses y agendas. El partido Nacional en general evade pronunciarse a favor o contra Biden explícitamente; Nasralla cultiva el mismo tono, mientras Zelaya y sobre todo los seguidores de LIBRE apelan a una postura más agresiva contra Hernández. Todos estos actores también buscan asegurarse fuerza entre sí y contra sus adversarios de cara a las elecciones presidenciales y del Congreso Nacional programadas para noviembre del presente año, a sabiendas del peso hegemónico que históricamente ha ejercido la diplomacia norteamericana sobre el sistema político de Honduras. En el caso de Zelaya y LIBRE, ellos vivieron en carne propia primero el abandono de Obama de la democracia real Hernández en Honduras luego del Golpe de Estado del 2009, no digamos el accionar abiertamente antidemocrático de la administración de Trump, no solo en las relaciones bilaterales, sino contra la inmigración hondureña que viene abandonando el país durante la última década.

LAS MIGRACIONES HONDUREÑAS HACIA EE.UU.

Cuando el entonces joven Senador Biden comenzó su larga carrera política en los EE. UU Richard M. Nixon era presidente, y en Honduras comenzaba otra de sus largas épocas de dictadura militar. Según registros oficiales estadounidenses, al final de la presidencia de Jimmy Carter, residían aproximadamente 50,000 hondureños en ese país, es decir, personas censadas en los EE. UU que se identificaban con orígenes en Honduras. El 52% de estos emigraron durante la década de 1970, y un 32% durante la década de 1960.

En 1990 la población “hondureña” en los EE. UU se aproximaba a los 90,000 habitantes. Tres décadas más tarde, siendo ya Biden vicepresidente, la población hondureña se aproximaba a los 600,000 mil, siendo esa cifra la conservadora. Otros estimados registran una cifra que se aproximaba entre los 700,000 y 940,000 habitantes, con casi el 60% de estos indocumentados. Según cifras actuales solo 80,000 hondureños están oficialmente registrados bajo el régimen legal del Status Temporal de Emergencia (TPS en sus siglas en inglés). En el 2019, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU deportó casi 42,000 hondureños con regreso a Honduras. Una cifra semejante deportó México de hondureños a su país de ciudadanía.

Durante las últimas dos décadas, los hondureños han sido la nacionalidad más deportada desde EE. UU entre los centroamericanas, según cifras oficiales norteamericanas. Por otra parte, las migraciones y deportaciones no solo se incrementaron numéricamente, sino que el carácter de la migración cambió radicalmente. No solo aumentó radicalmente la migración indocumentada, sino que su membresía tránsito de hombres jóvenes a incluir mujeres jóvenes; durante los últimos cinco años, se incrementaron masivamente familias enteras en caravanas, y más y más, también adolescentes y hasta niños.

CONCLUSIONES

En los primeros meses de 2021, la prensa internacional, y claro la norteamericana, ha captado trágicas escenas de cuanto ha cambiado esa situación en Honduras cuando solo se toma como punto de partida el 2015. El propio Plan Biden-Harris para Centroamérica hecho público en noviembre del 2020, reconoció la dramática situación en la región, y obviamente, en Honduras; el plan hace referencia a la experiencia de Biden como vicepresidente, apelando al “Plan para Centroamérica” que Biden publicó en el *New York Times* el 29 de enero del 2015. Cinco años más tarde, según el plan Biden-Harris, “la administración Obama-Biden reconoció que la migración irregular de los países del Triángulo Norte de América Central no puede abordarse de manera efectiva si las soluciones solo se centran en nuestra frontera sur.

Según Biden, *“La mejor respuesta radica en abordar las causas fundamentales que empujan a las personas desesperadas a huir de sus hogares en primer lugar: violencia e inseguridad, falta de oportunidades económicas y gobiernos corruptos. Como vicepresidente, Biden encabezó los esfuerzos de la administración en El Salvador, Guatemala y Honduras...”* Está por verse si en realidad se hace efectiva esa visión en Honduras, si verdaderamente se señalará e enjuiciará políticamente y legalmente no solo “la corrupción”, pero “los corruptos” y “las corruptas” con nombre y apellido; si verdaderamente se enjuiciará los nexos personales entre los corruptos en la clase política y sus extensos nexos con los corruptos en las fuerzas armadas, la policía nacional y otros cuerpos de seguridad involucrados en numerosas violaciones a los derechos humanos.

Dario A. Euraque es Doctor en Historia de América Latina y el Caribe de la Universidad de Wisconsin en 1990. Desde entonces es profesor e investigador en el Trinity College en Hartford, Connecticut, EE.UU. Ha publicado libros sobre la historia económica, social, política y racial de Honduras y dicta cátedra sobre la historia desde las migraciones de Centroamérica a los EE.UU. Ha sido conferencista en los EE.UU., Inglaterra, España, Francia, e Italia, y también en la mayoría de los países de Suramérica, más Cuba, Puerto Rico, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago.

La **Fundación Friedrich Ebert** (FES) fue creada en 1925, y es la fundación política más antigua de Alemania. Es una institución privada y de utilidad pública, comprometida con el ideario de la democracia social. La fundación debe su nombre a Friedrich Ebert, primer presidente alemán democráticamente elegido, y da continuidad a su legado de hacer efectivas la libertad, la solidaridad y la justicia social. Cumple esa tarea en Alemania y en el exterior en sus programas de formación política y de cooperación internacional, así como en el apoyo a becarios y el fomento de la investigación.

Toma Partido es una plataforma para la construcción de análisis, iniciativas y alianzas políticas y sociales amplias hacia el fortalecimiento y una transformación democrática emancipadora y feminista de los partidos políticos progresistas de América Latina y el Caribe. Es una invitación y una iniciativa de todas las oficinas de la Friedrich-Ebert-Stiftung en la región.

El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.

Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung o las de la organización para la que trabajan los/as autores/as o las de las entidades que auspiciaron la investigación.

CONTACTO

Friedrich-Ebert-Stiftung | Toma Partido

Plaza Cagancha 1145 Piso 8 · Montevideo · Uruguay

Coordinación del Proyecto Toma Partido:

Dörte Wollrad y Viviana Barreto | FES Uruguay

Ingrid Ross y Argerie Sánchez | FES América Central

Coordinación de publicaciones:

Jandira Dávila y Susana Baison

Diagramación | Cooperativa de Trabajo SUBTE

Más información:

toma-partido.fes.de

Contacto:

tomapartido@fes.de